

najuato á disposicion del Juzgado requerente, con cuyas disposiciones ejecutadas, alega Cañedo que se han violado en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución federal.

Vistas las constancias de autos y ante la sentencia del Juez de Distrito, en la que deniega el amparo pedido, fundándose en que la queja que se apoya en el artículo 16, no procede, porque la cuestion de que en último resultado se origina, es una competencia de jurisdiccion, no una violacion de garantías; en que la reclamacion que se hace citando los artículos 16 y 17, no descansa en justificacion ninguna, porque no decidida la competencia, no se puede afirmar que el Juez de letras sea incompetente; y obrando las constancias que obran en apoyo de una quiebra fraudulenta, no se puede afirmar que la deuda á que se refiere sea de un caracter meramente civil; y porque existiendo un auto motivado de prision y la naturaleza atribuida á la quiebra de Cañedo, el procedimiento que reclama invocando los artículos 18 y 19, no constituye violacion de las garantías que alega.

Por los fundamentos expuestos, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Se confirma la sentencia que en 11 de Agosto último pronunció en Guanajuato el Juez de Distrito mencionado, declarando que la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Manuel Cañedo contra los procedimientos del C. Juez de letras de lo Civil de Guanajuato, en virtud de los cuales se ordenó el secuestro de los bienes, libros y papeles del quejoso, la aprehension y remision de su persona á la misma Ciudad y su detencion y prision en la cárcel pública de Granaditas, por efecto de los autos de concurso que se siguen contra él, y del expediente que se le instruye sobre calificacion de la quiebra de que aparece responsable.

Devuélvanse las actuaciones del Juez de Distrito que las elevó á revision, acompa-

ñándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordáz.—Manuel de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 8 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por María Gerónima, á nombre de su hijo Cipriano del mismo apellido, contra el Alcaide de la Penitenciaría de Salamanca, por violacion de los artículos 10 y 21 del Código fundamental de la República.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Doña María Gerónima Hernandez, á nombre de su hijo Cipriano Hernandez, ha promovido el presente recurso de amparo, quejándose, de que en la persona de su hijo se han violado las garantías individuales consignadas en los artículos 19 y 21 de la Constitución federal, con la incomunicacion que por orden del C. Alcaide de la Penitenciaría de Salamanca, sufre desde 19 de Abril de 1871, ademas de la prision cuya pena esta estinguendo en esa Penitenciaría. Ademas del amparo de la Justicia de la Union, se pidió

la suspension provisional del acto reclamado, y de conformidad con el artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869, el Promotor fiscal tiene que dar su parecer sobre este punto.

En el informe rendido por el C. alcaide de la Penitenciaría de Salamanca, se exponen los hechos que han motivado que el reo Cipriano Hernandez esté separado de los demas, para evitar las continuas riñas que provocaba, y por tener sospechas de que fué cómplice en el homicidio de Juvenio Ramos, celador de los presos, cometido por Sotero Ramirez. La mala conducta de Cipriano Hernandez justifica, en sentir del C. alcaide, la providencia de tenerlo en un separo, sin que en su informe diga, que su disposicion ha sido confirmada por la autoridad judicial; y hace que para esta molestia que sufre, además de la pena de prision, haya habido motivo legal, que es el requisito que prescribe el artículo 19 de la Constitucion. Otra de las razones en que se pretende fundar la improcedencia del presente recurso es, que según el artículo 101 de la misma Constitucion, solo tiene lugar contra actos de las autoridades; y el alcaide de una cárcel no es autoridad, sino un empleado subalterno, sujeto á un superior, y cuyos procedimientos darán causa de responsabilidad ante los jueces comunes, pero no de la competencia de los tribunales federales.

El Promotor fiscal tratará primero este último punto, porque aunque es una cuestion puramente especulativa, de su resolucion depende no solo la decision del punto de suspension y la procedencia del recurso, sino aun decide si debia ó no admitirse el escrito de queja.

El artículo 101 de la Constitucion, concede el recurso de amparo contra los actos de cualquiera autoridad que violen alguna garantía individual. La palabra "cualquiera," expresa la generalidad que la ley dió á este recurso; y conforme á su objeto, no debe restringirse la interpretacion de es-

ta palabra, como dice el C. alcaide de la Penitenciaría de Salamanca, entendiéndose por autoridad solamente á las que no esten subalternadas á otras autoridades superiores, supuesto que por medio del amparo de la Justicia de la Union se hacen respetar los derechos del hombre, base y objeto de las instituciones sociales, y las atribuciones de los poderes federales ó de los estados, en el caso en que reciprocamente invaden la esfera de las facultades que les concede la Constitucion política de la República. En nuestra division de poderes, los alcaides de las cárceles del Estado, deben ser considerados como autoridades administrativas, aunque de una escala inferior. El reglamento de cárceles de 10 de Marzo de 1852 les concede facultades, para cuyo ejercicio es necesario que esten investidos de alguna autoridad. El artículo primero de dicho reglamento deja á su inmediato cargo la seguridad interior, tener orden y asco de las cárceles, siendo responsables de la custodia de los presos y de la incomunicacion de los que se hallan en este estado. Por el segundo artículo pueden suspender á sus subalternos. En el artículo octavo, se les faculta para poner incomunicados ó en separo á los presos ó usar de otros medios para su custodia eficaz, dando inmediatamente aviso á la autoridad de que dependan. Los artículos 23 y 24 disponen, que los celadores esten bajo su inmediata dependencia, debiendo vigilar su conducta, pudiendo suspenderlos de su encargo. Todas estas facultades derivadas de la ley, son atribuciones de la autoridad, y por ellas los alcaides no solo son agentes simples ejecutores de las órdenes de sus superiores, sino que pueden ordenar algunas providencias en los terminos de la misma ley.

Considerados los alcaides como autoridades inferiores del orden administrativo, debe examinarse de conformidad con el artículo sexto de la ley orgánica citada, si al hacer uso el alcaide de la Penitenciaría de Salamanca de las facultades que tiene en ra-

zon de su empleo, y según los datos que ministran hasta ahora las actuaciones, se deduzca que tal vez se han violado las garantías individuales invocadas en el escrito de queja, y si atendiendo á la naturaleza del acto que se reclama, debe decretarse su suspensión.

El artículo 19 de la Carta fundamental de la República, declara: que en las prisiones, toda molestia que se infiera á los presos sin motivo legal, es un abuso que deben corregir las leyes y castigar severamente las autoridades. Este principio humanitario colocado en sec. primera del tit. primero de la Constitución, que trata de los derechos del hombre, viene á ser una garantía individual, cuya observancia está defendida por el recurso concedido en los artículos 101 y 102 de la misma Constitución.

Los alcaides de las cárceles en el Estado, según el artículo octavo de su reglamento, pueden poner en incomunicación ó en separados á los presos, cuando lo creyeren conveniente para su eficaz custodia, dando inmediatamente aviso á la autoridad judicial ó política á cuya disposición estén. El Alcaide de la Penitenciaría de Salamanca no dice que haya dado este aviso, ni que la autoridad judicial haya decretado que Cipriano Hernandez estuviera en la mas estrecha incomunicación, como se dice en el escrito de queja, ó separado de los demas presos; como espresa el informe rendido por dicho alcaide. La mala conducta del reo no justifica la providencia de incomunicación, por que no siendo de la competencia del alcaide prolongar ninguna molestia impuesta á un preso despues del tiempo preciso para dar aviso á la autoridad respectiva, esta conducta sería motivo legal para que la autoridad judicial dictara las medidas que fueran necesarias, pero no para que el alcaide dispusiera la prolongación de la incomunicación. Debe entenderse de esta manera en el presente caso el artículo 17 citado, porque de lo contrario se opondria al artículo 16 de la Constitución, que manda:

que toda molestia personal sea decretada por la autoridad competente. La incomunicación que tanto el Código penal para los delitos contra la federación, como el del Estado, no estiman como pena propiamente tal, es la que tiene por objeto, la instrucción de un proceso pero no la que agrava la pena á que ha sido condenado un reo, viniendo á hacer que sufra una pena mayor, en cuyo caso ese aumento de pena es de la exclusiva competencia de la autoridad judicial, por que la prisión agravada con la incomunicación, es una pena propiamente tal, que no puede imponerse (artículo 21 de la Constitución federal) por las autoridades administrativas.

La incomunicación de un preso, es un acto irreparable, y que no decretarse su suspensión, pudiendo existir violación de alguna garantía individual como se deduce de lo que antes se ha dicho, se seguiria ejecutando la falta á la Constitución, sin que la sentencia definitiva pudiera producir el efecto de la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de violarse la ley fundamental de la República.

Por las razones espuestas, el Promotor fiscal fundado en los artículos tercero y sexto de la ley de 20 de Enero de 1869, pide: que el Juzgado se sirva decretar, se suspenda la incomunicación que impuso el C. Alcaide de la Penitenciaría de Salamanca, al preso Cipriano Hernandez, sin que esta providencia haya sido decretada por la autoridad judicial. Guanajuato, Mayo 7 de 1873.—*José Aguilar y Córdova.*

Otro pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que al evacuar el traslado prevenido en el artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869, para determinar si debía suspenderse el acto reclamado, como contrario á los artículos 12 y

21, de la Constitución federal, por María Gerónima Hernandez, examinó las cuestiones que se contienen en el escrito de queja, teniendo en consideración los hechos con los que estuvo conforme el C. alcaide de la Penitenciaría de Salamanca.

Suspendido el acto reclamado, dicho C. alcaide en su informe con justificación, repitió las razones que cree justifican sus procedimientos, y durante la dilación probatoria no se rindió ninguna prueba.

En el estado que actualmente guardan estos autos, el que suscribe tendría que exponer por vía de alegato, las mismas consideraciones que expuso en su pedimento de 7 de Mayo del presente año, por que en su concepto ellas abrazan todos los puntos que deben ser materia del fallo en el presente recurso. Por este motivo, reproduciendo dicho pedimento y fundado en las razones en él expuestas, el Promotor fiscal pide que el Juzgado se sirva conceder el amparo de la Justicia de la Unión que solicita María Gerónima Hernandez, á nombre de su hijo Cipriano Hernandez. Guanajuato, Junio 25 de 1873.—*José Aguilar y Córdoba.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

Guanajuato 13 de Agosto de 1873. Visto el presente juicio de amparo promovido por María Gerónima Hernandez, á nombre de su hijo Cipriano del mismo apellido, contra el alcaide de la penitenciaría de Salamanca, C. Santiago Sanchez, por violación de los artículos 19 y 21 del Código fundamental de la República. Visto el escrito de queja que refiere: que Cipriano Hernandez preso en el establecimiento mencionado, en donde esta estinguendo una condena judicial, ha sido puesto en estado de incomunicación, por orden del empleado contra quien se entabla este recurso; visto lo que espone la autoridad informante ne-

gando que el quejoso haya sido incomunicado, y diciendo que solamente lo ha mandado separar de los demas presos, en atención al caracter turbulento y pendenciero del reo; visto el pedimento fiscal que apoya la demanda; vista la citación para sentencia y todo lo que de autos consta. Considerando: que no está probada la incomunicación exterior á que alude la quejosa. Considerando: que el nominado alcaide, conforme al reglamento respectivo, no tiene facultades para decretar el aislamiento ó separar de los presos que estan á su cuidado; y por consiguiente, ha infringido los artículos 19 y 21 de la Constitución federal, con el hecho de separar al hijo de la peticionaria de sus compañeros de prision, supuesto que de esta manera le ha inferido una molestia, sin motivo legal, y le ha impuesto una agravación de pena, que solo compete á la autoridad judicial y á la administrativa ó política, en los casos determinados por la ley. Considerando: que los alcaldes ejercen autoridad en las cárceles, y por consiguiente procede contra ellos el recurso de amparo, con arreglo á las instituciones vigentes; por estas consideraciones, de conformidad con el pedimento fiscal y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el Juez de Distrito declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Cipriano Hernandez, contra la providencia del C. alcaide de la penitenciaría de Salamanca, en virtud de la cual ha sido privado aquel de la comunicación interior con los presos de dicho establecimiento, con violación de las garantías que proclaman los artículos 19 y 21 del Pacto federal. Notifiquese este fallo á las partes; publíquese en el periódico oficial; y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos legales; así el C. Juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Alvino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato 18 de Agosto de 1873.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 22 de 1873. Visto el recurso de amparo promovido ante el Juez de Distrito del Estado de Guanajuato, por María Gerónima Hernandez, quejándose, de que se han violado en la persona de su hijo Cipriano Hernandez, preso en la Penitenciaría de Salamanca, las garantías consignadas en los artículos 19 y 21 de la Constitución federal, con la orden que dictó el alcaide de esa prision, para que se pusiera á su expresado hijo en estado de comunicación.

Vistas las constancias de estos autos, y la sentencia del Juez de Distrito que de acuerdo con el parecer fiscal concedió el amparo pedido, y considerando Primero: que el alcaide de la Penitenciaría de Salamanca, no es una autoridad en el sentido constitucional y que sin tal caracter, falta en el caso presente, la personalidad oficial contra quien se reclama el acto que motiva esta queja, y cuyo requisito debe constar previamente para dar entrada á la procedencia legal del recurso de amparo. Segundo: que aun suponiendo que el referido alcaide fuera una autoridad, tampoco procedería este recurso; porque el estado de incomunicación de que se queja el preso Cipriano Hernandez, no proviene de la determinación arbitraria del repetido alcaide, sino que puede considerarse como una medida inherente á la naturaleza del régimen penitenciario, cuyo fin principal, es el de conservar la vida del hombre culpable, pero procurando siempre su corrección por los medios de reparación y de molestia prevenidos en los reglamentos de este sistema de cárceles, cuyo establecimiento recomienda tanto la Constitución de la República. Tercero: que por todo lo expuesto, no aparece que el acto reclamado constituya una violación en la persona del quejoso, de las garantías á que se refieren los artículos constitucionales que se alegan por el promovente; con fundamento de la ley de

20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada en la Ciudad de Guanajuato á 13 de Agosto último, en que se amparó al quejoso por el Juez de Distrito, declarándose: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Cipriano Hernandez, contra la orden que se atribuye al enunciado alcaide de la Penitenciaría de Salamanca, que ha motivado la interposición de este recurso.

Devuelvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Diciembre 2 de 1873.
Licenciado Emilio Ordaz, oficial mayor.